

## **PRESUPUESTO TRANSPARENTE, PARTICIPATIVO PERO NO INCLUSIVO**

**Luis B. Guerrero Figueroa**  
**Congresista de la República**

Nuestra sociedad y en particular nuestras elites se han caracterizado por estar a la vanguardia de los cambios internacionales, y en muchos casos su adaptación nos ha llevado a olvidar nuestra heterogénea realidad o el proceso correspondiente ha sido muy lento. Así mismo, en la medida en que el Estado se alejó de sus mandantes, las propuestas para modificar la relación entre el Estado y la sociedad civil confrontan rigideces institucionales que pueden poner en riesgo una transición democrática como la que vivimos.

Nuestra realidad presupuestaria ilustra cómo a veces las instituciones en el nivel macro y micro fracasan al desarrollar normas compartidas o al tratar de superar el descrédito de una pesada herencia como la del gobierno fujimontesinista. Una situación de esta naturaleza tiende a ser inestable, y si no mostramos madurez el resultado puede ser la inviabilidad de nuestra sociedad. De allí que nuestra propuesta de un Pacto Fiscal para la Gobernabilidad encuentre mayor sustento.

Tampoco podemos negar el conjunto de iniciativas adoptadas desde el gobierno de transición respecto de las necesarias reformas en el Presupuesto como consecuencia del período oscurantista de la gestión gubernamental de Fujimori.

El conocimiento de la composición del presupuesto se tornó especializado, accediendo al mismo sólo los funcionarios de un gobierno que progresivamente se deslegitimó y perdió representatividad. Ello motivó naturalmente la preocupación del gobierno transitorio por brindar información y promover la participación de la sociedad civil.

El acceso a la información tiene múltiples beneficios, como ayudar a prevenir los errores de los mercados o la inadecuada toma de decisiones por falta de información o por la incertidumbre que se genera ante su carencia. La elaboración de presupuestos participativos contribuye también a moderar la toma de decisiones colectivas y a ordenar las demandas de gastos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, estos beneficios no han sido satisfactorios, y nuestra población mantiene una actitud crítica hacia la gestión gubernamental, con los consabidos resultados que vivimos en estos momentos.

El reto de revertir la tendencia de nuestro sistema político hacia el déficit y la deuda, agudizado por la herencia de una cultura estatista, es un proceso institucional que nos demuestra que la modificación de una estructura presupuestaria rígida tiene que combinar el plano técnico con el político, garantizando así la viabilidad del país. Es un tema de actitudes, pues si consideramos que se educa con el ejemplo, los comportamientos austeros permitirán la modificación progresiva de la composición de nuestro presupuesto y el fortalecimiento de la democracia.

Nuestra administración pública necesita para su funcionamiento alrededor del 60% del presupuesto. De éste, aproximadamente el 45% se destina a gasto corriente y apenas un 15% para gasto de capital. Estos gastos tienen el inconveniente de haber sido administrado sin criterios de equidad, eficiencia, transparencia y control ciudadano. Ello hace explicable que sectores como educación, salud o las fuerzas armadas y

policiales, con magras remuneraciones cercanas a los 600 nuevos soles, expresen sus justos reclamos.

Por otro lado, a pesar del largo debate sobre la responsabilidad de la deuda externa, ésta mantiene niveles que conjuntamente con los pagos previsionales representan alrededor del 40% del Presupuesto, debiendo destacarse que anualmente nuestros ingresos fiscales son insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos, recurriéndose por ende al endeudamiento externo.

Todos estos elementos tienen que ser comprendidos por la población, pero también por un gobernante que pese a su familiaridad con la economía no sintoniza los intereses populares ni escapa a la rigidez institucional señalada.

Los mecanismos de transparencia y participación ciudadana son herramientas que permitirán la sostenibilidad del sistema democrático. Empero, la superación de las limitaciones de nuestro Estado dependerá de una real voluntad política por una reforma presupuestaria y el involucramiento de la población a través de adecuados mecanismos de información, liderazgo y una buena dosis de realismo. El marco de dicha apuesta será, lógicamente, el del equilibrio de poderes y el uso eficiente de los recursos públicos, aspectos que reforzarán la percepción de que la democracia es el mejor sistema de gobierno.